



OPINIÓN



POR PABLO
CABAÑAS DÍAZ

El equilibrio roto en la política agrícola

La crisis que atraviesa el campo mexicano no es un cúmulo de episodios aislados, sino la expresión de una fractura mayor que involucra precios, agua, industria, seguridad y confianza.

El país ha entrado en un ciclo de tensiones donde agricultores de más de 20 estados y transportistas han iniciado un paro nacional, bloqueando carreteras federales y estatales en protesta por la propuesta de reforma a la "Ley de Aguas Nacionales" y por la incapacidad institucional para atender las demandas agrarias.

En ese escenario, el papel del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se ha convertido en un punto central del debate público: no solo por sus decisiones técnicas, sino por la percepción creciente de que el equilibrio del campo se ha roto y que la Secretaría no está logrando recomponerlo.

La protesta agrícola tiene ahora dos ejes que se superponen: el conflicto por el precio del maíz y el rechazo generalizado a la reforma hídrica. Ambos temas tocan el corazón del sector.

En el caso del maíz, los productores exigen un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada, mientras el gobierno mantiene su oferta en 6 mil 500 pesos, bajo el argumento de que un incremento mayor desestabilizaría el precio de la tortilla y afectaría a los consumidores.

Pero el productor vive otra realidad: recibe cuatro o cinco pesos por kilo, mientras

la tortilla se vende entre 25 y 30 pesos, y cada kilo de maíz rinde 1.6 kilos del producto final.

Esa disparidad alimenta la percepción de que la cadena de valor está diseñada para beneficiar más a la industria que al campesinado.

A ello se suma la sospecha —incluso sin necesidad de pruebas concluyentes— de que el gobierno actual está demasiado cerca de los grandes procesadores de maíz.

La figura de Altagracia Gómez, empresaria vinculada a una de las principales harineras del país y asesora económica de la administración, emerge como un punto de tensión inevitable.

También pesa la idea, muchas veces repetida en círculos agrícolas, de que la llegada de Berdegué a la Secretaría estuvo impulsada por Jesús Vizcarra, un actor con un peso significativo en el sector agroindustrial.

El otro eje de la crisis —la reforma a la "Ley de Aguas"— ha detonado movilizaciones aún más amplias.

Agricultores, ganaderos y nogaleros de estados como Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua y Sonora han bloqueado carreteras estratégicas como la federal 57, la 90, la autopista Siglo XXI y diversas casetas.

La inconformidad es profunda: la prohibición de transmitir concesiones de agua entre particulares y la posibilidad de que la autoridad federal reasigne volúmenes se perciben como una amenaza directa a la estabilidad patrimonial del campo.

Los productores exigen que la discusión legislativa se detenga y se instale una mesa de negociación real; el gobierno sostiene que la ley no afectará los derechos existentes y que su prioridad es asegurar agua para la producción de alimentos.

En este debate, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha jugado un papel de mediación.

Ha criticado la negativa de algunos líderes a sentarse a negociar y ha recordado que las protes-

tas y los megabloqueos ponen en riesgo la integridad de la población, especialmente en situaciones de emergencia.

Pero la intervención de Gobernación, aunque institucionalmente necesaria, subraya un vacío más profundo: el de una Secretaría de Agricultura que no ha logrado construir un puente de confianza con quienes deberían ser sus interlocutores naturales.

En el centro de esta crisis, la figura del secretario Berdegué enfrenta un examen inevitable.

Su formación técnica es indiscutible, pero el campo no se gobierna solo con diagnósticos o advertencias macroeconómicas.

Se gobierna con confianza, con legitimidad, con sensibilidad para entender que cada hectárea perdida, cada concesión amenazada y cada precio injusto se traduce en la percepción de abandono.

El desafío no es únicamente resolver la ecuación del maíz o aclarar los alcances de la ley del agua; es reconstruir un vínculo roto con los productores que sienten que el Estado ha dejado de ser un mediador justo.

La pregunta ya no es si el secretario puede administrar técnicamente la política agrícola, sino si puede recuperar la confianza de un sector que hoy se siente en rebeldía.

El equilibrio agrícola que sostiene al país —precios, agua, seguridad y certidumbre— está hoy fracturado.

Si Berdegué no logra recomponerlo en los próximos días, su permanencia dejará de ser un asunto político para convertirse en un problema estructural para la gobernabilidad del campo mexicano.

*pcdmx2025@proton.me

Agricultores, ganaderos y nogaleros de estados como Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua y Sonora han bloqueado carreteras estratégicas como la federal 57, la 90, la autopista Siglo XXI y diversas casetas. La inconformidad es profunda